

# Contribuciones

**H**ace ya varios lustros nuestro país perdió el rumbo en materia de políticas públicas que conduzcan al desarrollo de su economía y a la elevación del bienestar de su población, y, lo que es más triste, por lo que hemos visto en los dos últimos años, esa pérdida de dirección se ha visto agravado sin solución aparente. Por razones fáciles de comprender debido a la propiedad estatal de la riqueza petrolera, esa desorientación profunda de la política ha estado asociada con visiones radicalmente enfrentadas sobre la intervención oficial en la asignación de recursos y en la orientación estratégica de la economía. Consecuente con el predominio político de las respectivas visiones, el papel del Estado en la búsqueda del desarrollo económico y social ha estado sujeto a un movimiento típicamente pendular. De este modo, durante un largo período que termina a finales de los años ochenta y bajo la influencia temporalmente sobregirada (respecto a las experiencias europea y norteamericana) del triunfalismo keynesiano-cepalino, la idea de brindarle al Estado un rol económico estratégico fue predominante.

Pero comprobada la dificultad de continuar sin graves peligros por esa ruta dirigista, a partir de 1989 y durante prácticamente toda la década de los noventa (con excepción de los años inmediatos a la crisis financiera de 1994), se produce un giro radical en la opinión política, pasando entonces a ser predominante el enfoque de políticas extremas de orientación comercial, con retraimiento visible de la intervención gubernamental y énfasis creciente en el papel del mercado. Constatados también luego los terribles impactos, en la economía y en el cuerpo institucional y social, de

esa creencia ingenua (aunque no desinteresada) en la sabiduría de la "mano invisible", y acompañando al cambio político que se inicia con el ascenso de Chávez al gobierno, se produce nuevamente un movimiento abrupto y rápido a favor de la injerencia estatal extrema en la conducción de los asuntos económicos. Situación en la cual nos encontramos, y que puede hacerse catastrófica para el país porque, contrariando lo que la experiencia universal (y no sólo el hundimiento de la Unión Soviética y de sus aliados de Europa Oriental) ha hecho enteramente claro, la orientación intervencionista o dirigista a ultranza ha adquirido un rango constitucional, exagerando lo que a todas luces ya era desmedido en la Ley Fundamental de 1961.

Limitándonos a los dos últimos movimientos del péndulo, cabe hacer una constatación de tremenda importancia para nuestra futura evolución económica y social: doce años de infructuosos intentos de estabilización y de esfuerzos retóricos de ajuste fiscal han erosionado suplementariamente la capacidad del Estado de formular y poner en práctica una política económica realmente constructiva, ampliando así la esfera de acción de adicionales fracasos en el futuro, en un ciclo vicioso que ha demostrado hasta ahora ser de difícil resolución. La mejor prueba de ello puede verse en el hecho de que el virtual encantamiento de nuestros actuales gobernantes con la (supuesta) capacidad ilimitada de transformación por parte del Estado sólo ha podido reivindicarse debido a la actual bonanza petrolera, en la misma forma en que la "súbita riqueza" petrolera de 1974 y años subsiguientes llevó a los gobernantes de la "Gran Venezue-

# al mal arte de gobernar

la" a impulsar una estrategia de desarrollo que no desmerecía el calificativo de socialista. Pero de igual manera que en ese entonces, en esta ocasión dirigido el país por unos gobernantes que han hecho suya la máxima Napoleónica -On s'engage et puis on voit- ("nos comprometemos y después veremos"), y que creen también que el auge petrolero es eterno, es imposible no ver cómo las consecuencias calamitosas de la actual gestión tendremos que pagarla más temprano que tarde los venezolanos con grandes sacrificios, en especial la mayoría de pobres en cuyo nombre se perpetra ese verboso desatino.

## Los fracasos gubernamentales

Por muchas razones es clara la utilidad de reflexionar sobre la lógica de este proceso perverso y de las enseñanzas que podrían derivarse de él. Como han recalcado los economistas, el motivo principal de la intervención gubernamental en la economía es la posibilidad no infrecuente del "fracaso del mercado". Es decir, cuando los resultados de este último son inadecuados es comprensible que se instrumenten medidas correctivas que encaren las fallas de coordinación del sistema de precios. Estas situaciones suelen conllevar un catálogo amplio de medidas, la gran mayoría de las cuales se han experimentado entre nosotros por razones muy conocidas. Aún así, también se ha visto una preocupación grande y creciente por los fracasos del gobierno; observándose que éste, en un intento por corregir los fracasos del mercado, puede ocasionar distorsiones económicas que pueden ser más graves que aquellas que dieran lugar a las medidas políticas adoptadas. Del análisis convencio-

nal de los fracasos gubernamentales pueden identificarse un mínimo de cuatro fuentes de fracaso. Primero, las consecuencias plenas de muchas medidas gubernamentales son difíciles de bosquejar por anticipado; segundo, en general el gobierno sólo tiene un control limitado sobre estas consecuencias; tercero, aquéllos que diseñan la política no tienen el control pleno de la puesta en práctica de la misma y; cuarto, los funcionarios electos y empleados públicos podrían tener incentivos para dedicarse a objetivos que no fueran del interés público.

Dejando de lado, por razones de espacio, el examen de cada una de esas fuentes, lo que permite concluir la experiencia histórica es que existe un amplio campo de acción de fracasos gubernamentales incluso cuando la política económica se base en un mecanismo estatal beneficioso, y que este campo de acción seguramente será más amplio cuando dicho mecanismo se vea de alguna manera incapacitado. Ahora bien, siendo los fracasos gubernamentales altamente dependientes de la condición del mecanismo estatal puede entonces sostenerse que el "arte de gobernar", es decir, el arte de la conducción de los asuntos del Estado, juega un papel clave en la aparición y desarrollo de aquellos fiascos. En otras palabras, en contra de una creencia altamente arraigada, especialmente entre nosotros, gobernar no es una tarea sencilla, es un arte que requiere habilidad, técnicas y juicio, denotando que el gobierno puede ejercitarse de manera satisfactoria o insatisfactoria. Carecer de ese arte, que entre otras cosas presupone la capacidad para diseñar e instrumentar una política económica competente y la habilidad de mantener bajo control los fracasos gu-

bernamentales, puede tener consecuencias económicas desastrosas.

## Gobernantes de la IV y V República

Los gobernantes de la llamada IV República, en particular quienes ejercieron a partir de 1974, no se caracterizaron precisamente por un dominio idóneo de ese difícil arte, de allí que no extraña lo calamitoso de sus ejecutorias. Sin embargo, quienes asumieron esas responsabilidades hace algo más de dos años han demostrado no sólo que no conocen ese exigente arte sino que están dispuestos a hacer sus propias contribuciones al mal arte de gobernar. Siendo víctimas del síndrome de que "es preciso hacer algo y pronto", o sea de la presión para actuar como vía de autojustificación de sus nuevas posiciones, y, sin duda, teniendo el poder para acometer esos "algos", los gobernantes chavistas no se han andado por las ramas en cuanto a tomar decisiones, la mayoría de ellas desatinadas e inefectivas (para el propósito formulado). Veamos algunas de las áreas en las cuales resaltan tanto la repetición de incompetencias tradicionales como los nuevos aportes. Se han reestructurado ministerios y otros organismos públicos, cambiándoles por supuesto el nombre pero no haciéndolos más eficaces en su gestión. Se han modificado leyes y reglamentos, pero ello no ha conducido a una mejor ordenación de la acción del sector público y de los particulares. Se han firmado numerosos convenios con otros países, pero decir que de ellos se derivan beneficios tangibles para la economía nacional es confundir deseos con realidad. Se mantiene una frívola retórica a favor de la integración, pero en la práctica se debili-

tan los mecanismos institucionales que con mucha dificultad había logrado levantar la Comunidad Andina de Naciones, de la cual aún formamos parte. Y, en el remate de la retórica o la inconsciencia, se proclama a los cuatro vientos la "guerra a muerte" a la pobreza, pero no se sabe actuar contra el desempleo y la baja de los salarios reales.

En segundo lugar, habiendo heredado una burocracia gubernamental plagada de vicios y deficiencias, los gobernantes chavistas han desatendido la necesidad de elevar la calidad de la misma. Que sepamos, hasta ahora, no se ha hecho el mínimo esfuerzo por mejorar los niveles de formación profesional y técnica de los funcionarios y menos aún por dar expresión real a los propósitos de carrera administrativa que define la ley. Por el contrario, lo que sobresale en la administración del personal al servicio del Estado es la ampliación de las nóminas y el reforzamiento de viejas prácticas clientelares, ahora subordinadas a los intereses del MVR. Igualmente, y en lo que respecta a los funcionarios públicos de alto rango, lo que resalta es una elevada rotación de los equipos, lo que hace extremadamente difícil disponer de una gerencia competente y evitar la corrupción. Como resultado, en poco tiempo se ha agravado severamente la pérdida de capacidad promocional del desarrollo por parte del Estado y hecha más onerosa la política de gasto público.

Por último, quienes dirigen ahora los destinos de la nación hacen una notable contribución al mal arte de gobernar en un punto de gran sensibilidad para el progreso económico y social, a saber: la ideología o filosofía económica que orienta la acción del gobierno. Como muestran las experiencias exitosas, la ideología económica es clave en dos sentidos; primero, para movilizar la sociedad en torno a una combinación de ideas esenciales y llegar a un consenso, que se constituye en el cuerpo de principios orientadores que hacen funcionar la sociedad; y segundo, para contribuir a calificar las medidas y las acciones que adopten el Estado y los particulares, y a garantizar que ellas formen un programa coherente, y no sólo un conjunto de disposiciones aisladas y

a menudo contradictorias. Hasta el momento, ni Chávez ni ninguno de sus seguidores ha hecho una formulación medianamente sistemática o coherente de esa ideología, en la cual el papel clave en la búsqueda del cambio estructural y el crecimiento se asigna, con más esperanzas que convicciones, a la acción omnipresente del Estado. Además, al igual que el "camino del éxito", del cual se afirma que está en "permanente construcción", esa filosofía se intenta edificar con ayuda de cualquier material que se juzgue apropiado, como lo demostró la idea de los préstamos sin interés (que el propio Presidente reconoció haberle sido "inspirada" durante el último de sus viajes al Medio Oriente). Sin embargo, lo que sí está claro, para vergüenza de los historiadores y virtual tragedia del país, es que la burguesía nacional no tiene espacio importante en la estrategia económica que con base en esa ideología se procura formular e instrumentar.

En un país donde la Constitución reconoce la propiedad privada y el papel de la empresa privada en las tareas del desarrollo, más allá de su incoherencia, esa ideología es un contrasentido tremendo que compromete severamente nuestras posibilidades de recuperación y crecimiento económico. La razón es muy sencilla y salta a la vista: el sector privado de la economía, altamente diversificado en términos de las áreas en las cuales opera, sigue generando la porción mayoritaria del PIB y el grueso del empleo de los trabajadores. Quiérase o no es un factor decisivo y de gran beligerancia en la marcha de los asuntos de la economía y de la sociedad. Sus integrantes -los empresarios privados, y en un sentido más amplio, los propietarios de capital- poseen una capacidad de reacción que conviene no subestimar. Como se ha hecho claro en los dos últimos años, esa reacción es la otra cara de la falta de credibilidad generalizada entre los empresarios de la política económica que intenta aplicar el gobierno, y se ha traducido en una profundización de la baja o nula inversión, en la fuga de capitales, y en el estancamiento de la producción. Si esta situación no se modifica, y ello conlleva un cambio radical de la orientación de políticas del gobierno, el enfrentamiento de la pobreza sólo tendrá un carácter retóri-

co y el desarrollo económico y social deberá esperar a las calendas griegas.

Estos hechos ponen de relieve que la consolidación de un esquema de mal gobierno traduce fallas graves en la red de relaciones y procedimientos que determinan formalmente quién autoriza a quién y en qué condiciones, es decir, del sistema de representación política, ya que cuando ese sistema carece de representatividad social real es prácticamente inevitable que los malos gobernantes (incompetentes, derrochadores, corruptos o arbitrario, o una mezcla de ellos) actúen a sus anchas. De allí que, en forma universal, se ha reconocido que para evitar o minimizar esos desafueros sea necesario contar con un parlamento que merezca ese nombre, y que actúe de contrapeso efectivo frente al poder Ejecutivo. Quizás con la excepción del período 1959-63, el Parlamento venezolano nunca ha sido un buen ejemplo de una adecuada representación social y política, pero por motivos conocidos, en particular por la falta de personalidad de sus integrantes y su deprimente alienación al caudillo de la "Revolución Bolivariana", la actual Asamblea Nacional ha agudizado esa crisis de representación, haciendo prácticamente insoluble el grave problema que representa un poder Ejecutivo cuyas principales figuras han mostrado un pésimo dominio de las artes del buen gobierno. En estas condiciones, y dado que un gobierno competente constituye en la práctica un "bien público" cuya oferta tiende a ser insuficiente, la creación de la capacidad para gobernar pasa a ser una tarea que la sociedad no puede dejar librada a la sola esfera del sector público. A la luz de los deplorables hechos de la presente gestión gubernamental, hacer efectiva esa capacidad se convierte en la máxima responsabilidad cívica de los venezolanos. La historia nos juzgará justamente en función de la respuesta que sepamos dar a ese reto.

**HÉCTOR VALECILLOS**  
ECONOMISTA. PROFESOR UCV